

República de Colombia  
**Corte Suprema de Justicia**  
Sala de Casación Civil

**LUIS ALONSO RICO PUERTA**  
**Magistrado Ponente**

**AC1738-2019**

**Radicación n° 11001-31-03-001-2015-00360-01**

(Aprobado en sesión de treinta de enero de dos mil diecinueve)

Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil diecinueve  
(2019).

La Corte procede a decidir sobre la admisión de la demanda de casación presentada por la demandante Source & Market Ltda., frente a la sentencia de 9 de octubre de 2017 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso verbal promovido por la recurrente contra Motorola Solutions Colombia Ltda. y Motorola Mobility Colombia S.A.S.

**I. ANTECEDENTES**

**1. Pretensiones.**

La demandante formuló las siguientes:

(i) Declarar que, desde el 1 de noviembre de 2000 hasta el 2 de junio de 2010, existió un contrato de agencia comercial entre la promotora y la convocada Motorola Solutions Colombia Ltda.; que el 2 de julio de 2010, aquella lo cedió a Motorola Mobility Colombia S.A.S. y con esta continuó hasta el 30 de septiembre de 2012, fecha en la que fue terminado en forma injustificada y unilateral por la última citada.

(ii) Condenar a Motorola Mobility Colombia S.A.S. a pagarle a la demandante la suma de \$737.651.322, con indexación e intereses moratorios, por concepto de *«cesantía comercial, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio»*; y \$3.989.848.678, también actualizados y con intereses moratorios, como *«indemnización equitativa definida en el inciso 2º»* de la misma norma citada; igualmente, se imponga condena en costas a las dos accionadas.

(iii) Subsidiariamente, si no se accede a declarar la cesión del contrato afirmado, formula idénticas pretensiones contra Motorola Solutions Ltda., pero con reducción de las cuantías a \$1.069.278.594, y \$3.435.078.253, en su orden.

(iv) Sin la debida separación, y sin precisar que son subsidiarias de las anteriores, reclamó declarar la existencia del contrato de agencia comercial, entre ella y la demandada Motorola Mobility Colombia S.A.S., cuya duración fue desde el 2 de julio de julio de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2012; y que *«terminó de forma injustificada y unilateral»* por ésta.

(v) Como consecuencial de las indicadas en el numeral anterior, suplica que se condene a la referida entidad accionada a pagarle las sumas de \$88.333.607 y \$551.916.579, indexadas y con intereses moratorios, por concepto de «*cesantía comercial*» e «*indemnización equitativa*», en su orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1324 del Código de Comercio.

(vi) Además, para el caso del fracasar la declarativa de existencia del aludido contrato de agencia, formuló como «*segundas subsidiarias*» la de condenación a Motorola Mobility Colombia S.A.S., a pagarle \$174.525.822, con indexación e intereses moratorios, como «*indemnización de perjuicios causados por la terminación unilateral anticipada y sin justa causa del contrato, por concepto de lucro cesante*».

## **2. Fundamentos fácticos.**

Se afirma que en «*el mes de noviembre del año 2000, se inició una relación contractual entre S&M y MOTOROLA DE COLOMBIA LTDA (hoy MOTOROLA SOLUTIONS (...)), la cual no contaba con contrato escrito, pero tenía por objeto la promoción de los equipos celulares marca MOTOROLA en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en los puntos de venta de los operadores.*»

Source & Market Ltda. (S&M), el 1 de noviembre de 2000 comenzó a realizar «*actividades de promoción (Sell Through)*» para la empresa Motorola de Colombia Ltda., cuyo «*objetivo es: (i) lograr que el Producto (sic) sea adquirido por los clientes finales, lo que se traduce en promover la venta y conquistar el mercado, (ii) evacuar el inventario previamente adquirido por el operador, (iii) generar nuevas*

*compras por parte del operador, lo que se conoce en el mercado como «Recompra» y (iv) construir un reconocimiento de la marca, lo cual equivale a consolidar un mercado y abrir el espacio para introducir nuevos productos de la marca que se ha posicionado. Esta etapa se conoce como «Sell Through».*

*La promoción de esa mercancía se hacía «principalmente en los puntos de venta de los operadores o distribuidores, pero también se hace a través de eventos o actividades promocionales que se realizan en lugares distintos a dichos puntos.»*

*S&M ejecutaba «presentaciones comerciales», «eventos y estrategias promocionales», visitaba los puntos de venta de los operadores para recaudar información de los productos promovidos y para hacer seguimiento a «la competencia», de lo cual debía presentar informes a Motorola Solutions o a Motorola Mobility; además realizaba «la instalación y entrega de material de promoción para punto de venta (Merchandising), todo esto según las estrategias de mercadeo y promoción estructuradas y ejecutados por S&M por cuenta de MOTOROLA SOLUTIONS o MOTOROLA MOBILITY (...)*

*También se afirma que «S&M planteaba eventos y estrategias promocionales para obtener mayores ventas de productos marca MOTOROLA, pero a su vez recibía lineamientos, instrucciones y metas de ventas por parte de MOTOROLA SOLUTIONS o MOTOROLA MOBILITY, según la etapa contractual.»*

*Para el cabal ejercicio de su actividad promotora, la demandante «administraba las bodegas del material de comunicación (Material P.O.P), material de promoción para punto de venta (Merchandising), y de muestras reales de teléfonos para promoción e*

*incentivo.» y «proyectaba cantidades y materiales para ser usados por los promo-vendedores, y para ser entregados a los operadores o distribuidores en los diferentes puntos de venta», lo que debía ser “avalado” por las empresas ahora demandadas.*

Las accionadas incrementaban o reducían el presupuesto destinado para las *«actividades de promoción»*, dependiendo del comportamiento creciente o decadente de las ventas, lo cual afectaba los ingresos de la pretensora en esas mismas proporciones.

La reclamante acoplaba su *«estructura comercial»* a las necesidades y requerimientos de las convocadas, las cuales le fijaban metas de ventas y la presionaban o felicitaban, según el resultado de la gestión en cada periodo; además, durante todo el tiempo de la relación contractual con ellas, les promocionó equipos Motorola en *«forma EXCLUSIVA»*, o sea que no lo hizo *«ni incentivó el reconocimiento y posicionamiento de equipos celulares de otras marcas.»*

Toda la gestión realizada por la convocante con respecto a los celulares marca Motorola, en los distintos ámbitos, benefició *«directamente el patrimonio de MOTOROLA SOLUTIONS y MOTOROLA MOBILITY (según la etapa contractual), al punto que el mercado ganado por S&M en su calidad de agente, es exclusivo de MOTOROLA MOBILITY.»*

Las actividades desarrolladas por la demandante tuvieron un proceso de crecimiento y desarrollo durante todo el tiempo de la relación contractual, de lo cual ésta derivó

«ingresos operacionales» que aparecen relacionados en el libelo, con especificación de cada año.

Motorola de Colombia Limitada cambió de razón social a partir del 29 de abril de 2011, por la de Motorola Solutions Colombia Ltda. (Motorola Solutions).

Motorola Mobility S.A.S. (Motorola Mobility) fue creada el 29 de enero de 2010.

El 2 de julio de 2010, Motorola de Colombia Ltda. cedió a Motorola Mobility Colombia S.A.S., su posición en el contrato celebrado con S&M; pero esta continuó ejecutando sus actividades normalmente, al punto que *«se siguió entendiendo con las mismas personas de MOTOROLA en Colombia y a nivel regional, y cobraba las tarifas acordadas contractualmente con MOTOROLA SOLUTIONS.»*

El 1 de enero de 2011, la actora y Motorola Mobility, suscribieron un contrato nuevo, *«pero sin interrumpir en ningún momento las actividades de promoción y demás actividades conexas»*, el cual tendría vigencia por ese año; pero fue prorrogado *«tácitamente hasta el mes de julio»* de 2012.

Motorola Mobility realizó invitación a S&M para *«proponer ofertas para “promotores”, según las instrucciones remitidas por correo»*, y esta resolvió atender ese llamado; después de conversaciones y negociaciones, el 16 de abril de 2012, la hoy actora fue informada de que había *«ganado el proceso de selección»*; pero no hubo *«formalización del contrato»*, lo cual *«no*

*impidió que S&M siguiera realizando la promoción de los productos y MOTOROLA MOBILITY pagará (sic) por ellos.»*

El 16 de septiembre de 2012, Motorola Mobility le remitió a la convocante un «Acuerdo de Terminación» de la relación contractual, el cual fue rechazado por ésta. Después de una contrapropuesta de la última para ponerle fin a ese contrato de común acuerdo, y de comunicaciones a través de correos, ese vínculo negocial terminó el 1 de octubre de 2012, por decisión unilateral e injusta de la referida demandada.

### **3. Actuación procesal.**

El libelo fue admitido el 18 de marzo de 2015, mediante proveído legalmente notificado a las accionadas.

La convocada Motorola Mobility Colombia S.A.S. interpuso recurso de reposición alegando falta de jurisdicción y competencia, lo que fue resuelto de modo negativo en auto de 23 de junio de 2015.

La accionada Motorola Solutions Colombia Ltda. replicó en debida oportunidad formulando total oposición a todas las pretensiones, y proponiendo excepciones así: *«inexistencia de un contrato de agencia comercial – S&M sólo prestó servicios de mercadeo y publicidad a Motorola Solutions», «caducidad de cualquier acción derivada de una supuesta relación de agencia comercial», «falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer de las pretensiones de la demanda», «indebida tasación de las pretensiones de la demanda respecto a Motorola Solutions – oposición y rechazo del juramento estimatorio», «compensación», y «genérica».*

Por su lado, la codemandada Motorola Mobility Colombia S.A.S., tempestivamente contestó expresando abierta oposición a todas las pretensiones, amén de proponer las siguientes excepciones de mérito: *«inexistencia de un contrato de agencia comercial – ausencia total de sus elementos esenciales», «La única relación jurídica entre las partes fue un contrato de publicidad y mercadeo», «inexistencia de elementos constitutivos de un contrato de agencia comercial – no se configura una agencia comercial por la presencia de labores de promoción y publicidad en una relación comercial», «mala fe del demandante – actuación contra actos propios – S&M prometió no interpretar esta relación como una agencia comercial», «mala fe – actuación contra actos propios – S&M prometió no presentarse ni considerarse, bajo ningún entendido, como representante de Motorola Mobility», «mala fe – actuación contra actos propios – S&M prometió no alegar el pago de indemnizaciones por la terminación anticipada del contrato y menos aún frente a una terminación regular como la que se presentó en este caso», «inoponibilidad de cualquier tipo de obligación distinta de las derivadas del contrato cedido», «improcedencia de argumento según el cual Motorola Mobility creció en el mercado exclusivamente en razón de las labores publicitarias y de promoción adelantadas por S&M.», «falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer de las pretensiones de la demanda /Cláusula compromisoria», «la demanda de S&M no reúne los requisitos formales que debe reunir toda demanda –indebida tasación de las pretensiones de la demanda respecto a Motorola Mobility – oposición y rechazo del juramento estimatorio», «compensación» y «genérica».*

#### **4. La sentencia de primer grado.**

Cumplido el trámite normal del proceso, el 26 de octubre de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Bogotá dictó sentencia de primera instancia en la cual negó todas las pretensiones – principales y



subsidiarias – contenidas en la demanda y condenó en costas a la convocante, para lo cual hizo la pertinente fijación de agencias en derecho.

## **5. La sentencia impugnada.**

La parte actora interpuso recurso de apelación. Tramitada la segunda instancia, en fallo emitido el 9 de octubre de 2017, el *ad quem* confirmó el de primer grado, y condenó en costas a la impugnante.

Al iniciar las consideraciones, el Tribunal anunció que ratificaría la decisión de primera instancia porque *«no existe prueba en este caso de los elementos esenciales del contrato»* de agencia comercial.

Las premisas en que fundó la decisión se pueden sintetizar y presentar así:

(i) *«(...) de las estipulaciones de los contratos que vincularon a las partes no se desprenden los elementos característicos de ese contrato; pero lo cierto es que haciendo abstracción de lo formalmente convenido, no encuentra la Sala que la ejecución de esos negocios haya adquirido en la práctica los contornos propios de la agencia, fundamentalmente ante la constatación de que S&M no puede sostener que promovió por sí sola los negocios de Motorola y porque la labor que cumplía no la desarrollaba con la independencia propia del agente, (...)»*

(ii) *«(...) son aspectos pacíficos para las partes que era el fabricante de los celulares Motorola INC. (luego Motorola Mobility Holding Inc.), que no las sociedades demandadas, quien cerraba directamente las*

*compraventas de los equipos con los operadores de telefonía celular en Colombia. Es asimismo pacífico que eran estos últimos quienes realizaban las ventas a los consumidores finales.»*

(iii) *«(...) la labor de intermediación que reivindica la demandante estaba prevista para ser ejecutada en esa segunda fase del proceso de comercialización, es decir: en la que podría calificarse como la reventa del producto por parte del operador de telefonía celular al consumidor final.»*

(iv) No hay duda de que la pretensora participaba en la cadena de comercialización de teléfonos celulares, y que *«fungía como prestador de servicios de trade marketing»; pero eso, per se, no significa que «haya actuado en condición de agente comercial de las empresas demandadas».*

(v) Consideró que la demandante obraba *«como receptor de estrategias de mercado mucho más generales, adoptadas o aprobadas por el fabricante y las sociedades demandadas y a veces por los propios operadores, con el fin de que el inventario en poder de estos últimos pudiera ser vendido con mayor rapidez y facilidad (que tuviera “rotación”), propiciando así adquisición de más teléfonos celulares al fabricante por parte de los operadores de telefonía celular.»* Y que, por tanto, *«del hecho de que la labor de la empresa demandante redundara directamente en el círculo de comercialización de los teléfonos móviles no se sigue que, entonces, S&M tuviera la condición de agente comercial, pues en la forma en la que estaba estructurado el negocio de Motorola Solutions Colombia Ltda. (luego Motorola Mobility S.A.S.), es inevitable concluir que S&M no podría reivindicar o atribuirse, de manera absoluta, la promoción – y subsiguiente adquisición – de dichos teléfonos por parte de los consumidores finales.»*

(vi) Afirmó que los interrogatorios de parte y los testimonios recibidos dan cuenta de que varias empresas con distintas especialidades concurrían en las actividades y estrategias de mercadeo diseñadas por las demandadas; luego, *«S&M difícilmente podría sostener, como lo haría un agente comercial, que fue como consecuencia exclusiva de su actividad, ejercida de manera independiente, que las empresas demandadas conquistaron, conservaron o ganaron posicionamiento para Motorola dentro del mercado de las terminales de telefonía celular.»*

(vii) Según dijo, lo que hubo entre las accionadas y la demandante fue *«un contrato de colaboración»*.

(viii) También juzgó que se impone *«descartar así mismo el presupuesto relacionado con la independencia que debe caracterizar al agente comercial»,* puesto que *«la potestad del agente de impartir instrucciones para el cumplimiento de la labor encomendada no puede llegar al punto que el margen de maniobra del agente quede sensiblemente reducido.»* y en este caso, *«las actividades que desarrollaba la empresa demandante, estaban fuertemente condicionadas»* por Motorola y, en veces, por los operadores.

(ix) Finalmente, sostuvo que también se notaba la falta del requisito relativo a la forma de remuneración recibida por la pretensora; pues, aunque sí había *«un componente referido al comportamiento de las ventas presentadas dentro del trimestre anterior, no estaba del todo conformado únicamente por ese rubro, ya que también dependía fuertemente de los lanzamientos que la marca tuviera previstos, y de otros factores.»*

(x) Igualmente consideró que no existen elementos de juicio para concluir que la relación jurídica sustancial habida entre las aquí litigantes, hubiese terminado en forma unilateral e injusta; pues, al contrario, hay prueba de una finalización por común acuerdo de las partes.

## **6. La demanda de casación.**

Se formulan dos cargos, uno por la causal primera del artículo 336 del C.G.P. y el otro por la segunda. En aquel, se acusa al fallo de violar directamente los artículos 1317 y 1321 del Código de Comercio; en el último, se le atribuye haber incurrido en conculcación indirecta de la ley sustancial *«como consecuencia del error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la contestación hecha por Motorola Mobility y de las pruebas»* que luego señaló.

## **II. CONSIDERACIONES**

### **1. Régimen del recurso extraordinario.**

Es apropiado advertir que el recurso de casación formulado en este caso se propuso en vigencia del Código General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se rige por esta normativa.

### **2. Fundamentación de la demanda de casación.**

En virtud del carácter extraordinario del citado medio impugnativo y la finalidad del mismo, el legislador ha

impuesto exigentes requisitos formales para la adecuada estructuración de la demanda.

La fundamentación técnica de las causales autorizadas para cimentar el «*recurso de casación*», exige o comporta demostrar los dislates del juzgador de segunda instancia, que pudieron haber comprometido la legalidad de la decisión cuestionada, tanto en la aplicación de las normas de derecho sustancial (yerros *in judicando*), como las relativas al derecho procesal (errores *in procedendo*).

En ese contexto, el artículo 344 del Código General del Proceso ha fijado los requisitos para la adecuada sustentación de la «*demanda de casación*», dentro de los cuales se hallan los siguientes:

La formulación por separado de los respectivos cargos, con la especificación de forma clara, precisa y completa de los fundamentos de cada acusación.

En caso de plantearse la infracción de las normas de derecho sustancial regulatorias del asunto materia del litigio, como consecuencia de errores jurídicos (vía directa), o yerros fácticos o de derecho (senda indirecta), ya sea por aplicación indebida o por la preterición de las mismas, es indispensable incluir la disposición legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida, sin que se requiera integrar una proposición jurídica completa.

Cuando se plantea la violación indirecta, que comprende los supuestos de la causal segunda contemplada en el precepto 336 *ibídem*, por errores de hecho y de derecho, no es admisible referirse a aspectos fácticos no debatidos en las instancias.

Tratándose de «*error de derecho*», se exige señalar las normas probatorias consideradas transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que lo fueron.

En el evento de invocarse «*error de hecho*», deberá manifestarse en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas o piezas procesales sobre las que recayó el yerro en la actividad de apreciación de su contenido material.

A fin de probar el desacierto fáctico, habrá de evidenciarse que respecto del escrito introductorio del proceso, su contestación o los medios de prueba, hubo pretermisión o suposición total o parcial de tales elementos de juicio, o alteración de su contenido material, ya por adición o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversación arbitraria o ilógica del respectivo texto.

Igualmente, se debe especificar lo inferido por el juzgador del respectivo medio de prueba y señalar el contenido material del mismo, para de esa manera revelar o exteriorizar en qué consistió la alteración de la prueba.

En el evento de fundarse la crítica en la preterición u omisión de apreciar pruebas incorporadas al plenario, se

requiere identificar el respectivo medio de convicción, así como su texto en aquello que guarde relación con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado y que tengan incidencia en la decisión adoptada.

El censor tiene también la carga de evidenciar la trascendencia del dislate en el sentido de la sentencia recurrida, para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe proceder a explicar por qué la decisión habría de ser distinta a la cuestionada, además de favorable a los intereses de la parte que la impugna.

### **3. Estudio de la demanda formulada.**

#### **3.1. Primer cargo.**

Tras invocar como violados los preceptos 1317 y 1321 del Código de Comercio, la casacionista se ocupó de cuestionar los planteamientos y conclusiones del Tribunal en torno a los conceptos de “independencia” y “promoción”, como elementos que aquél consideró esenciales para estructurar el contrato de agencia comercial, pero nada más agregó a su crítica; es decir, omitió el cumplimiento de todas las demás exigencias necesarias para considerar formal y técnicamente apto el cargo formulado.

En efecto, recriminó al *ad quem* haber considerado que «a pesar de que S&M participaba en un momento bien determinado de la cadena de comercialización de celulares, y que su actividad «redundara

*directamente en el círculo de comercialización de los teléfonos móviles», S&M no es un agente comercial, porque no podría reivindicarse de manera absoluta la promoción y adquisición de los teléfonos, dado que los demandados tenían contratos con otras personas que hacían publicidad y marketing, adicionó que S&M no cubría todos los puntos de venta y que las labores de S&M estaban fuertemente condicionadas por la estrategia corporativa o plan de marketing de las demandadas.». Sostuvo que con ese «análisis para que una persona sea agente y se configuren los elementos de promoción e independencia, el agente tendría que hacer el 100% de la publicidad del producto, tener presencia en el 100% de su territorio o de los puntos donde se vende el producto y no recibir instrucciones ni pautas del agenciado y por su parte el agenciado no podría hacer publicidad de su producto por otros medios y mucho menos dar instrucciones a su agente. Interpretación que es contraria al artículo 1317 del Código de Comercio y a su interpretación en lo que respecta al elemento de la independencia. También es contraria al artículo 1321 del Código de Comercio y a la interpretación del elemento de promoción.»*

Con apoyo en cita jurisprudencial, afirma que «la independencia de que trata el artículo 1317 del Código de Comercio tiene como objeto principal distinguir el contrato de agencia del contrato de trabajo», y que el precepto 1321 *ibídem* establece el «deber de cumplir el encargo según las instrucciones del agenciado»; de manera que «la independencia no implica ausencia de instrucción, sino ausencia de subordinación»; en consecuencia, con la interpretación realizada, el Tribunal «olvida que ni la ley ni la jurisprudencia exigen que la independencia sea absoluta».

Lo reseñado es todo el ataque formulado en la censura; es evidente la total ausencia de planteamiento y desarrollo del alcance o la trascendencia del desafuero denunciado, «en



*el sentido de la sentencia*» cuestionada; es decir, se desatendió la carga de revelar o demostrar cuál habría sido el sentido jurídicamente correcto del fallo atacado, si el juzgador no hubiese incurrido en el desatino acusado.

Ese es un requisito legal necesario expresamente impuesto por el inciso tercero del literal a), numeral 2, del artículo 344 del C. G. P.; y es tarea ineludible porque, de lo contrario, por fuerza de la presunción de legalidad y acierto con la cual están amparadas las decisiones judiciales, habrá de mantenerse incólume la sentencia recurrida en casación; luego, en ausencia de tal presupuesto, no puede abrirse paso el recurso extraordinario.

La naturaleza dispositiva y extraordinaria de este medio impugnativo, así como las presunciones de legalidad y acierto de las cuales están revestidos los fallos judiciales, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, imponen al censor *«la obligación de atacar de manera idónea todos los pilares que fundamentaron la decisión objeto del reproche, al tiempo que le exige que explique en qué consistió la infracción de la ley que le atribuye al fallo, y por qué el error demostrado tiene la virtualidad de variar el sentido del proveimiento en orden a restablecer el derecho sustancial quebrantado; es decir que la crítica que se hace a las conclusiones de la sentencia tiene que ser completa, evidente y trascendente.»*<sup>1</sup>

En este caso, la impugnante apenas cumplió la exigencia de señalar las normas cuya violación acusa con el

---

<sup>1</sup> C.S.J. Sala de Casación Civil. Auto de 16 de diciembre de 2013. Exp. 11001-3103-023-1997-04959-01

atacado acto de interpretación realizada por el *ad quem*; pero, ningún esfuerzo hizo en torno a demostrar la trascendencia del dislate, la forma como incidió en la decisión cuestionada, para dejar en evidencia que, de no haberse incurrido en ese yerro, la decisión habría sido favorable a sus intereses. Esos reparos así formulados tienen la entidad propia de un alegato de instancia, incompatible con este recurso extraordinario.

A lo anterior se suman otras deficiencias que hacen improcedente la censura por incompleta, lo cual implicaría mantener en firme la sentencia.

En efecto, además de concluir insatisfechos los requisitos de «independencia» y «promoción», el *ad quem* también cuestionó el relativo a la «remuneración del agente», respecto del cual dijo que *«podría asimismo ser puesta en entredicho en el sub lite, en la medida en que los honorarios que recibía la demandante estaban directamente relacionados con las ventas ajustadas por el fabricante con los operadores, o entre estos y los consumidores finales, sino del presupuesto destinado por las empresas demandadas para hacer promoción de sus productos en los puntos de venta, presupuesto que venía fijado por el fabricante a nivel global y que luego se aterrizaba para las distintas regiones y países, y en el que si bien es cierto que existía un componente referido al comportamiento de las ventas presentadas dentro del trimestre anterior, no estaba del todo conformado únicamente por ese rubro, ya que también dependía fuertemente de los lanzamientos que la marca tuviera previstos, y de otros factores.»*. Este aspecto no fue protestado en modo alguno por la casacionista; luego, aun si resultara demostrado el desafuero acusado con respecto a los otros dos elementos atacados, la sentencia se

mantendría en firme, porque sigue teniendo suficientes argumentos y elementos de apoyo.

En presencia de la comentada falencia técnica, forzoso es inadmitir la demanda en lo concerniente a esta censura.

### **3.2. Segundo cargo.**

Está fundado en la causal segunda del artículo 336 del C. G. P., acusando a la sentencia de haber violado *«indirectamente la ley sustancial como consecuencia del error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la contestación hecha por Motorola Mobility y de las pruebas»*, transgresión que pregonan con respecto a los preceptos 1602, 1613 y 1614 del Código Civil.

El error de hecho planteado se afirma con respecto a *«la apreciación de (i) la contestación de Motorola Mobility, (ii) en una interpretación contraria al contenido del interrogatorio de parte de Carolina Prieto (...) y del señor Ramses (sic) Libardo Pinilla, (iii) el no haber valorado el modelo de acuerdo que remitió Motorola Mobility luego de manifestar su intención de terminar el contrato y (iv) el video que obra en el expediente»*.

Según alega la recurrente, después de referirse a esos medios de convicción, *«es claro que obran pruebas en el expediente que dan detalles de la terminación del contrato, de las cuales no se puede inferir que exista mutuo acuerdo. Esto en contravía de lo asegurado por el Tribunal cuando afirmó que las únicas pruebas que versan sobre la terminación son los testimonios de Nilo Castelloti, María José Martín (sic) y el correo del 16 de septiembre de 2012.»*

Como en el anterior cargo, tampoco en éste se ocupó de resaltar cada específico yerro, ni aludir a su trascendencia en forma precisa; ni siquiera, cómo resultaron transgredidas las normas invocadas. Eso es bastante para desechar la censura, por las mismas razones expuestas en precedencia. Sin embargo, hay todavía una razón que *per se* impone la inadmisión de la demanda.

En efecto, esta Corporación ha insistido en que: «(...) la acusación dirigida a establecer la violación directa o indirecta de preceptos sustanciales, **requiere que el censor determine las normas de ese linaje que fueron vulneradas, las cuales necesariamente tienen que estar ligadas con el proceso y, más precisamente, con la propia decisión cuestionada**, tal y como, adicionalmente, lo estableció el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, cuando expresó que, **en tratándose de la causal primera de casación, '[s]erá suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza [sustancial] que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa'**» (se subraya).<sup>2</sup>

De manera que no basta con la sola y simple demostración del dislate fáctico imputado al fallo acusado para el éxito del recurso; es necesario que con ese desafuero se haya producido ciertamente la violación de una norma de derecho sustancial; pero, además, no de cualquiera a criterio del censor, sino de una verdaderamente regente del caso juzgado que pueda ser considerada como esencial para resolverlo conforme a derecho. De otro modo, no puede

---

<sup>2</sup> C. S. J. SC de 14 de diciembre de 2011, exp. 11001-3103-007-2005-00533-01.

abrirse paso el ataque por esa vía extraordinaria, porque caería en el vacío el error fáctico denunciado y acreditado.

### **3.2.1. La norma sustancial.**

La Corte ha sido reiterativa en explicar que por precepto *de derecho sustancial*, «'(...) se entiende el que declara, crea, modifica o extingue relaciones jurídicas concretas, es decir, el que se ocupa de regular una situación de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jurídica, ese calificativo no lo pueden tener los artículos que regulan determinada actividad probatoria o procesal. Los de aquélla, porque su violación simplemente constituye un puente para dar al traste con el derecho sustancial, como así lo diferenció el legislador (artículo 374, in fine, del Código de Procedimiento Civil), y los de ésta, porque su trasgresión lo que ponen en entredicho son las garantías mínimas de defensa y contradicción, para cuya defensa, en casación, se instituyó una causal distinta a la instituida para denunciar errores de juzgamiento' (...).»<sup>3</sup>. Así lo memoró en la SC-9167-214.

### **3.2.2. La naturaleza de los artículos 1602, 1613 y 1614 del Código Civil Colombiano.**

Aunque los tres preceptos forman parte del Estatuto Sustantivo Civil, esta Corte no les ha reconocido la categoría de «*normas de derecho sustancial*», porque sus contenidos no desarrollan la función propia de aquellas.

En efecto, en sentencia SC de Dic. 14 de 2011, exp. 11001-3103-007-2005-00533-01, esta Corporación reiteró:

---

<sup>3</sup> CSJ SC, 14 dic. 2010, rad. 2006-00050-01

*«(...) como ha dicho la Sala acerca del art. 1602 del Código Civil, “el 1602 de la primera de las codificaciones antedichas, que ciertamente es el hontanar mismo de toda la teoría contractual, consagratoria de la quizá más grande metáfora de tal ordenamiento, en cuanto que para vivificar la fuerza de lo que se pacta se equipara nada menos que con el concepto de Ley, es norma que por el mismo grado de abstracción no consagra en principio derechos subjetivos concretos, por lo menos no aquellos que ahora se discuten, como lo son por cierto los derechos que efunden de un pago de lo no debido, (...) (Ver sentencias S-145 de 1º de octubre de 2004; y S-148 de 30 de junio de 2005)” (cas. civ. sentencia de 1º de junio de 2007, exp. nº 05001-31-03-006-2001-0331-01) (...).»*

Por otro lado, en la SC2506-2016 dijo: *«(...) los artículos 1613, 1614 y 1615, del Estatuto Civil, que explican los componentes de la indemnización de perjuicios (daño emergente y lucro cesante), no son sustanciales pues tan sólo hacen una clasificación y explicación de dos modalidades de daños resarcibles.»* y en la SC17654-2017 insistió en esa posición con respecto al precepto 1613, memorando lo dicho en la SC071 de 29 abr. 2005. Rad. nº 0829.

En este caso, es evidente la ineptitud del cargo formulado por ausencia de señalamiento de al menos una norma de derecho sustancial con respecto a la cual se acusara violación indirecta con los desafueros denunciados; pues, como se ha dejado visto, ninguna de las tres relacionadas en la formulación del ataque, tienen esa naturaleza requerida. En esas condiciones, vano se torna el ataque; pues, aun si se demostrara el desacierto afirmado, no comportaría violación alguna de los aludidos artículos, porque no tienen la naturaleza de normas de derecho

sustancial. En definitiva, ninguno de ellos constituye base esencial del fallo atacado por esta vía extraordinaria.

Por lo demás, no admite discusión que la señalada omisión de la impugnante extraordinaria, impide que al momento de resolver de fondo el recurso, la Corte pueda desarrollar la función asignada como tribunal de casación, relativa a determinar si hubo infracción de la ley sustancial, no siendo factible suplir, enmendar o completar la tarea de la recurrente, en virtud del principio dispositivo que orienta el recurso extraordinario, de acuerdo con el cual se le exige proponer la acusación de manera precisa, clara y completa.

### **3.3. Conclusión.**

Las reseñadas deficiencias de los dos cargos propuestos en la demanda de casación formulada por la demandante y recurrente, imponen la inadmisión del libelo, con apoyo en el numeral 1 artículo 346 del Código General del Proceso, por no reunir los requisitos formales.

De otra parte, no es procedente seleccionar el asunto para una eventual casación de oficio, porque no se evidencia la estructuración de alguno de los supuestos consagrados en el último inciso artículo 336 del Código General del Proceso, según el cual la Corte *«podrá casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales.»*

### **III. DECISIÓN**

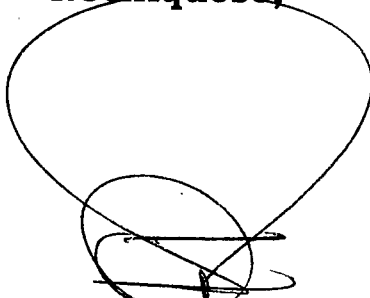
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

#### **RESUELVE**

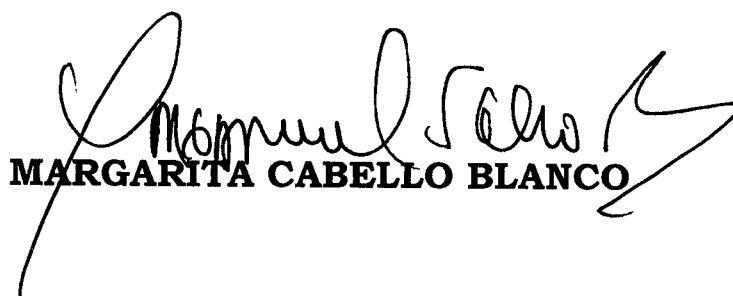
**PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE** La demanda de casación formulada por Source And Market Ltda – S&M, frente a la sentencia de 9 de octubre de 2017 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso verbal promovido por ésta contra Motorola Solutions Colombia Ltda y Motorola Mobility Colombia S.A.S.

**SEGUNDO. DEVOLVER EL EXPEDIENTE** al Tribunal de origen, lo cual deberá hacer la Secretaría.

**Notifíquese,**



**OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE**  
Presidente de Sala



**MARGARITA CABELLO BLANCO**





**ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO**



**AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO**



**LUIS ALONSO RICO PUERTA**



**ARIEL SALAZAR RAMÍREZ**



**LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA**